



ANÁLISIS DE POLÍTICAS

Políticas que favorecen la agricultura familiar del maíz en Ecuador

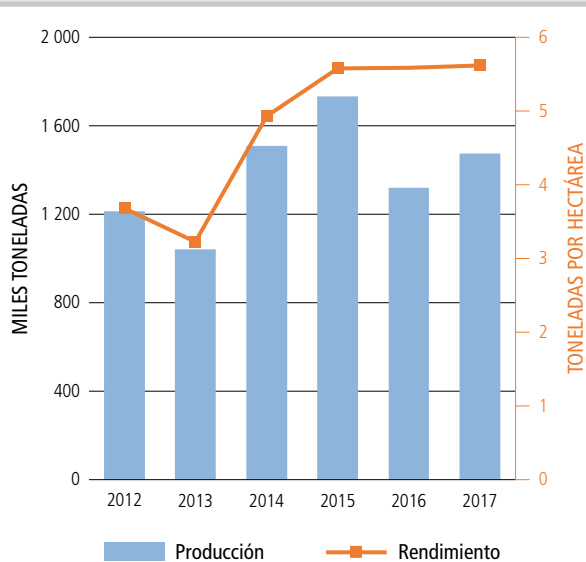
Importancia del maíz en Ecuador

La producción de maíz aporta un significativo 4,4% al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola de Ecuador y representa una fuente fundamental de ingresos para más de 180 000 personas. Según el último censo, el sector consta de aproximadamente 104 000 unidades productoras. La gran mayoría son pequeños agricultores (menos de 10 ha), mientras que los medianos (10–20 ha) representan el 6.3% y solo el 0.5% son grandes agricultores (más de 20 ha).

En términos de rendimiento, los resultados son alentadores: 5,62 toneladas por hectárea (ton/ha), siendo mayores a los presentados por países vecinos como Colombia y Perú (Figura 1).

La producción de maíz en Ecuador se concentra en las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas, Loja, Santa Elena, El Oro y Orellana.

FIGURA 1. Producción de maíz amarillo en Ecuador 2012–2017



Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Ecuador y FAO.

MENSAJES CLAVES

- ▶ El precio mínimo de sustentación del maíz no se encontraba operativo al ser los precios de mercado superiores.
- ▶ Los gremios agrícolas deben pasar por procesos de unificación que permitan negociaciones con el gobierno de manera más expedita.
- ▶ La Gran Minga Agropecuaria representa la oportunidad para los pequeños campesinos de recibir los incentivos necesarios para seguir siendo parte de la economía rural.

En Ecuador es imposible desligar la economía del maíz de la producción avícola. Ambos rubros se encuentran fuertemente interconectados, siendo el maíz la principal fuente de materia prima en la industria de alimentos para pollos.

Precio de mercado por encima del precio mínimo de soporte

Hasta el año 2017 se aplicó un precio mínimo de sustentación de USD 14,90. Pero habiendo limitaciones en la oferta nacional, el precio real ha sido superior a este valor, convirtiendo al precio mínimo de sustentación en una política no operativa durante los últimos años.

Por otro lado, el aumento nacional de las capacidades de almacenamiento desde el 2012, fue usada en más de una vez de forma especulativa por parte de los mayoristas (comprar barato vender caro) manteniendo el precio en ese punto de la cadena muy por encima del equilibrio entre oferta y demanda.

La reforma impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que implemento una franja de precios al quintal de maíz a partir de la cosecha de invierno 2018 (precio techo de USD 17,20 y un precio piso de USD 13,50), ha sido la respuesta en materia de política comercial a este problema.

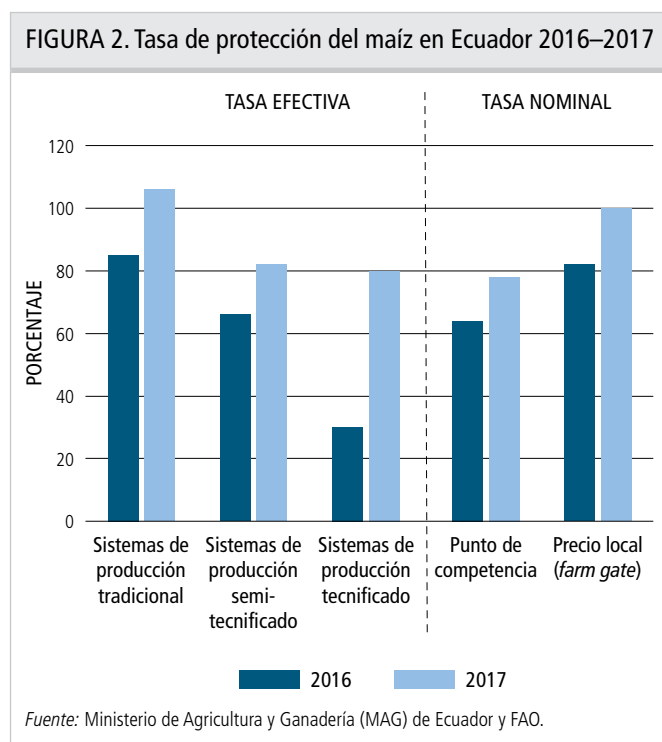
El precio techo funciona como una herramienta para evitar la especulación al alza.

Las políticas comerciales y productivas protegieron a los pequeños productores

La comercialización de maíz se encuentra regulada por un Reglamento que abarca precios domésticos, absorción de cosecha nacional y regulación de importaciones.

Tanto las políticas de fomento productivo (kits de alto rendimiento) como las políticas comerciales (precios mínimos de sustentación y aranceles) adoptadas por el Gobierno, a pesar de provocar una distorsión en los precios a nivel nacional, también generaron altos niveles de protección a los productores.

Cuando se examinan los resultados de la Tasa Efectiva de Protección (TEP), que tiene como base el cálculo del valor agregado generado por el cultivo de maíz, se observa que los productores que trabajan con un sistema de producción tradicional, tienen una mayor que los medianos y grandes productores con un sistema de producción semi-tecnificado y tecnificado, logrando alcanzar el objetivo de proteger a los pequeños productores (Figura 2; panel izquierdo).



Las políticas productivas y comerciales permiten que el productor tenga un doble beneficio. En primer lugar, alcanza mayores rendimientos con insumos que gozan de subsidios, y por otro lado, la oferta insuficiente crea un precio atractivo para los pequeños productores.

Las políticas de precios generan una alta protección para productores y comerciantes mayoristas

Las políticas comerciales vía precios adoptadas por el Gobierno para proteger a la producción de maíz nacional, como los precios mínimos de sustentación hasta inicios del 2018 y los cupos a las importaciones, no sólo generan impactos a nivel de productor, sino en toda la cadena de comercialización de maíz.

Al analizar la Tasa Nominal de Protección (TNP), que permite examinar el impacto de las políticas comerciales sobre el precio pagado a los productores y comerciantes por los productos primarios, se puede observar que existen brechas significativas entre los precios locales y los referenciales, alcanzando altos niveles de incentivos para los comerciantes mayoristas y sobre todo para los productores (Figura 2; panel derecho). Por otro lado, este alto apoyo en los precios al maíz, converge en desincentivos al consumidor final, especialmente en el pollo, que es la proteína de mayor consumo nacional, generando un mayor impacto a las familias con menor poder adquisitivo.

La política de fijación de precios ha beneficiado también a los intermediarios, debido a que existe una oferta limitada de maíz para el sector industrial. Cuando el precio tiende al alza, sube para todos los eslabones anteriores a la producción de balanceados en proporciones similares: la industria incrementa el precio de compra a los centros de acopio y a su vez los centros de acopio incrementan el precio de compra al agricultor para satisfacer la demanda. No obstante, este tipo de prácticas perjudica a pequeños productores de proteína animal que no tienen la capacidad financiera de cubrir altos costos del maíz.

Opciones para promover una cadena del maíz sostenible

Se requiere analizar la cadena del valor del pollo, para un mejor entendimiento de la integración económica de ambos rubros, con miras a dar una visión integral desde el punto de vista de la política agrícola.

Una evaluación económica, a nivel de finca, del uso de nuevas tecnologías de almacenaje puede ser útil para manejar las reservas de maíz.

Por último, es interesante explorar nuevas alternativas y promover estrategias complementarias que incurran en un menor gasto público.